

▶ LUCHA CONTRA ETA



La etarra Gracia Morcillo.

## La Justicia libera a una acusada de colaborar en el asesinato de Fernando Múgica

AGENCIAS / MADRID-BILBAO

El panorama de la lucha anti-terrorista se convirtió ayer en un claroscuro después de que, tras anunciarse que el Gobierno vasco dispondrá ya este mismo año de medio millón de euros para retirar de las calles de la región cualquier vestigio del enaltecimiento a los etarras, la Audiencia Nacional absolviera a una de las más históricas criminales de la banda.

La instancia con sede en Madrid liberó a Gracia Morcillo al no encontrar pruebas de que colaborara en el asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica, que la organización criminal perpetró el 6 de febrero de 1996 en San Sebastián. La delincuente, que ya había cumplido una condena de cuatro años en Francia, está en libertad al no tener más causas pendientes con la Justicia.

**NUEVA ENTREGA.** Entretanto, las autoridades galas entregaron al etarra Mikel Otegi, que será interrogado hoy mismo por el asesinato de dos *ertzainas* en 1995.

Por lo que atañe a las buenas noticias, los municipios vascos y el Ejecutivo de Vitoria rubricaron ayer un protocolo por el que ambas partes de comprometen a eliminar de las calles de la región norteña cualquier simbología alusiva a ETA.

El acuerdo fue suscrito por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), Jokin Biddarratz, que proclamaron compartir el objetivo común de «prevenir y eliminar la existencia de pintadas y carteles de enaltecimiento del terrorismo en los municipios de la Comunidad».

Aunque en el texto no se haga explícita referencia, la intención de ambas partes pasa por retirar también las fotografías de presos, generalmente exhibidas en los bares y locales de ocio dependientes de los partidos y asociaciones proetarras.

▶ LAS ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN ENTURBIAN LA VIDA POLÍTICA

# Cospedal abre la puerta a una purga en Valencia por la trama de 'Gürtel'

La 'número dos' del PP reitera su plena confianza en el líder levantino, Francisco Camps, pero proclama que, «quien haya hecho algo que no tenía que hacer, no estará en el partido»

• El fiscal desestima la denuncia de los conservadores contra el informe policial que vincula la trama de Francisco Correa con la supuesta financiación ilegal de los 'populares'.

AGENCIAS / MADRID-VALENCIA

Como casi todo lo que concierne en exclusiva a los políticos, el caso Gürtel lleva camino de convertirse en una especie de universo paralelo, tan omnipresente como ajeno a la verdadera realidad española. Por más que no existan pruebas ni acusaciones más allá de las que la propia Justicia valenciana no consideró siquiera dignas de investigación, la presunta trama de tráfico de influencias se resiste a desaparecer de la actualidad, en gran medida debido al empeño de los socialistas por resucitar una polémica que les permite alejar algo la atención de su cuestionadísima política económica.

La última maniobra se ha realizado, una vez más, en connivencia con las Fuerzas de Seguridad, controladas por Interior, a las que se encargó la realización de un informe que, supuestamente, dado que no consta en ningún sumario, pondría de manifiesto la implicación de algunos responsables conservadores levantinos en maniobras ilegales para, junto con Francisco Correa y sus secuaces, financiar de manera ilegal al partido de Mariano Rajoy.

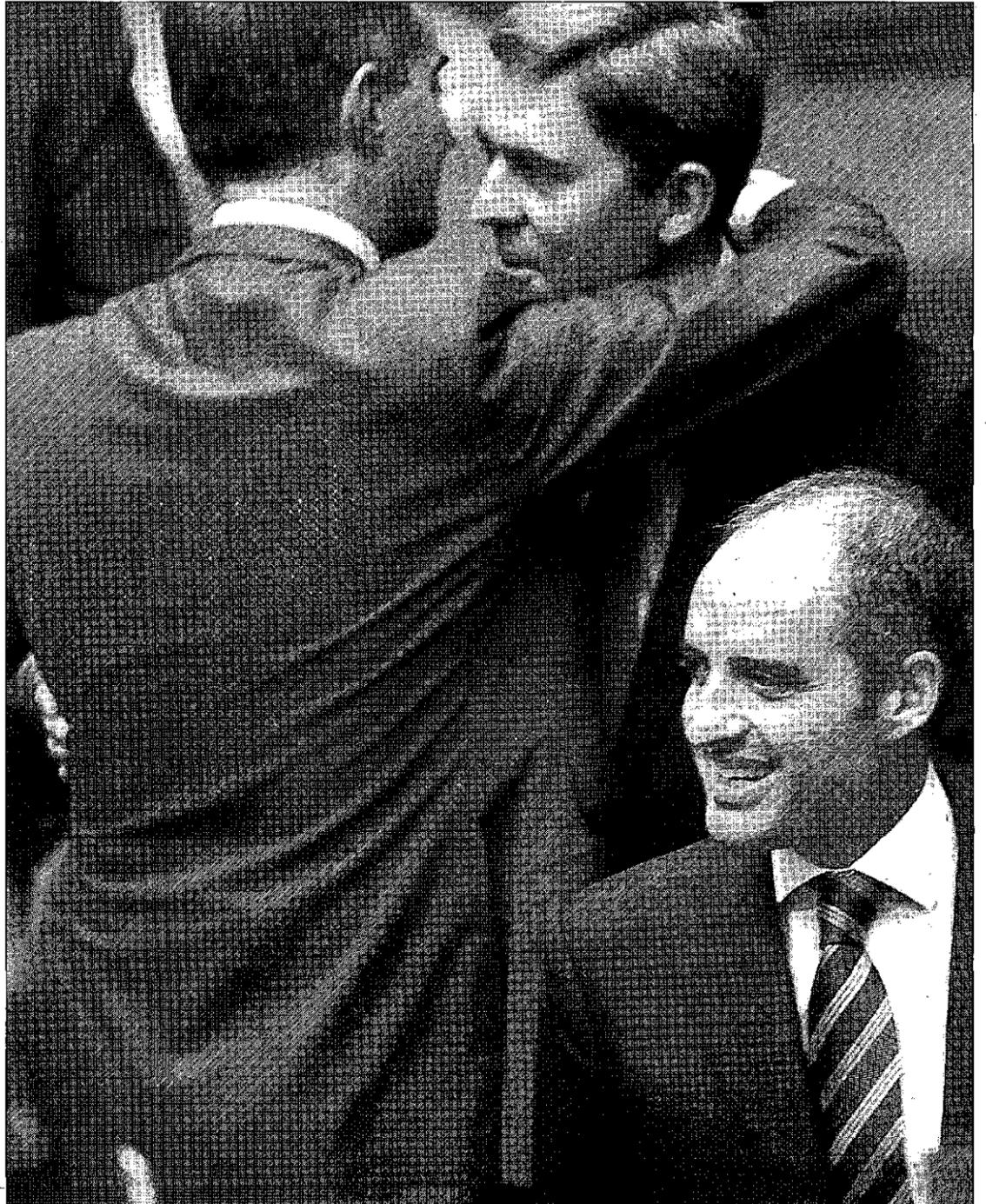
Lo cierto es que, con o sin pruebas, las acusaciones contenidas en ese dossier han vuelto a revolver el avispero en el principal partido de la oposición, cada vez más incómodo con los continuos quebraderos de cabeza que le causa el presidente valenciano, Francisco Camps.

Más allá de las declaraciones literales, que insisten en defender a capa y espada a su *barón*, la cúpula de Génova podría estar preparando la salida del controvertido líder regional, que se produciría forzando su dimisión o, en todo caso, sugiriéndole que corte algunas cabezas entre sus colaboradores más cercanos.

Así lo dejó entrever ayer la secretaria general *popular*, María Dolores Cospedal, quien, tras reiterar su «confianza más absoluta» en Camps y su convencimiento en que «va a actuar como tiene que actuar», abrió la puerta a futuras purgas al proclamar que, «quien haya hecho cosas que no tenía que hacer, no estará en el partido».

Al hilo, la manchega recordó que el PP «ha sido el primero en dar ejemplo» contra la corrupción, como demuestran «varios alcaldes de la región de Madrid que ya no están en sus puestos».

Entretanto, la Fiscalía valencia-



Los 'número dos' del PP regional, Ricardo Costa (i), y del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, se abrazan junto a Camps. / EFE

na, a la que la propia Cospedal acusó de trabajar al servicio del Gobierno y no de los ciudadanos, decidió ayer archivar la denuncia presentada por el secretario general del PP en la región levanti-

na, Ricardo Costa, contra el anteriormente mencionado informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre una posible financiación irregular.

Según señalaron fuentes al Mi-

nisterio Público, la queja del conservador ha sido inadmitida por cuanto, a su entender, de los hechos descritos en la denuncia no se desprende la comisión de acto delictivo alguno.

## Canarias, otra vez en la picota

AGENCIAS / LANZAROTE

Para regocijo de quienes sostienen que la corrupción no es patrimonio de ningún partido, sino que afecta por igual a todos, siempre, por supuesto, que haya ocasión para recalificar algún terreno, la Policía Nacional resucitó ayer el ya añejo caso de la localidad lanzaroteña de Yaiza. Los agentes detuvieron a ex alcalde José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y a

dos de sus hijos, a los que se acusa de la concesión de licencias supuestamente ilegales para diversos proyectos hoteleros.

Los arrestos son consecuencia de una denuncia interpuesta en noviembre de 2006 por el actual secretario general de los socialistas de la isla canaria, Carlos Espino, ante la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado. Espino denunció entonces al ex regidor de Yaiza y al actual primer

edil de Tegui, Juan Pedro Hernández, de Coalición Canaria.

Ahora, tras una dilatada investigación para esclarecer la concesión de permisos para edificar unas 8.000 plazas de alojamiento en el municipio sureño, ha comenzado el proceso para anular dichas autorizaciones y se ha procedido al arresto de sus presuntos instigadores políticos, no solo los tres capturados ayer, sino varios otros cargos municipales de la zona.